

República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público



Juzgado Diecinueve Civil Municipal

Bogotá D C, veinte (20) de enero de dos mil veintidós (2022).

Ref. 2016-01017

Radicado No.: 11001 40 03 019 2016 0101700
Demandante: BANCO CORBANCA COLOMBIA S.A.
Demandado: EDILBERTO ANTONIO PINTO ROMERO
Proceso: Ejecutivo singular.
Instancia: Primera instancia.

I. ASUNTO A TRATAR

Procede el despacho a proferir sentencia dentro del proceso ejecutivo singular promovido por BANCO CORBANCA COLOMBIA S.A. contra EDILBERTO ANTONIO PINTO ROMERO.

II. ANTECEDENTES

Pretensión

BANCO CORBANCA COLOMBIA S.A., actuando por conducto de apoderado judicial, instauró demanda ejecutiva singular de menor cuantía contra EDILBERTO ANTONIO PINTO ROMERO, con el fin de obtener el pago de la suma de \$30.992.163 m./cte como capital incorporado en el pagaré No. 0001004001810497940881, el monto de \$2.388.262 m./cte correspondientes a intereses plazo y los intereses de mora liquidados a la tasa máxima legal certificada desde el 18 de mayo de 2016 hasta que se verifique su pago (fl. 12 c.1).

Fundamentos fácticos

Para fundamentar sus pretensiones la parte actora adujo en síntesis que:

1. El demandado Edilberto Antonio Pinto Romero otorgó a favor del BANCO CORBANCA COLOMBIA S.A el pagaré No. No. 0001004001810497940881 con espacios en blanco y carta de instrucciones como respaldo de la obligación

adquirida en la suma de \$33.380.425 que comprenden \$30.992.163 por concepto de capital y \$2.388.262 correspondiente a intereses de plazo.

2. Llegada la fecha de exigibilidad del pagaré, la parte ejecutada se abstuvo de realizar el pago de la obligación pactada y a la fecha de presentación de la demanda se encuentra en mora.

3. El título valor base de la acción presta merito ejecutivo por contener una obligación clara, expresa y actualmente exigible.

III. ACTUACIÓN PROCESAL

1) Mediante auto adiado 31 de octubre de 2016 se libró mandamiento de pago a favor de BANCO CORBANCA COLOMBIA S.A. contra el señor EDILBERTO ANTONIO PINTO ROMERO, por las sumas de: **i)** \$30.992.163 m/cte por concepto del capital contenido en el título objeto de recaudo, **ii)** intereses de mora sobre el capital anterior, liquidados a la tasa máxima certificada mes a mes por la Superintendencia Financiera de Colombia, desde el 18 de mayo de 2016, hasta que se verifique el pago total de lo adeudado. Y **iii)** los intereses de plazo en la suma de \$2.388.262 m./cte. (fl.18 c.1).

2) El demandado se notificó en debida forma a través de curador *ad-litem*, quien dentro del término legal se opuso a las pretensiones del libelo formulando como excepciones las denominadas “**PRESCRIPCIÓN**”, la cual fundamentó en que la acción cambiara tratándose del título valor pagaré tiene un término de prescripción de tres años contado desde el día del vencimiento, siendo así, en el caso concreto la obligación se hizo exigible el día 17 de mayo de 2016, por tanto, la prescripción operó el 17 de mayo de 2019, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 94 del C.G.P., el demandante contaba con el término de un año desde que se notificó el mandamiento de pago por estado para enterar al demandado sin que ello ocurriera y “**GENERICA**”.

IV. PROBLEMA JURÍDICO

Observa el despacho que el problema jurídico en el presente asunto radica en determinar si la excepción planteada por la parte ejecutada tiene la virtualidad de enervar en todo o en parte el mandamiento de pago librado.

V. CONSIDERACIONES

1. Cumple precisar que se reúnen a cabalidad los denominados presupuestos procesales necesarios para la normal configuración y trámite del litigio, a saber, la capacidad de las partes, demanda en forma y competencia del Juzgado, obran

en el expediente y no se observa causal de nulidad alguna que conlleve a invalidar lo actuado en todo, o en parte, pues se advierte que los diferentes actos procesales se adelantaron con arreglo a las normas que los gobiernan.

En ese sentido, en cuanto al primer requisito para que un documento pueda ser considerado título ejecutivo, es decir, la **claridad**, implica que la obligación en él contenida se encuentre estructurada de forma lógica, racional y precisa, de manera que, exista plena certeza respecto del objeto de la prestación y de los individuos intervinientes, la persona que se encuentra obligada a cumplir, así como, aquel en favor de quien se ejecutará la misma.

Frente al presupuesto de **expresividad**, éste consiste en que el contenido del documento debe ser entendible sin que haya lugar a realizar una interpretación más allá de la información plasmada en el cuerpo del título basándose en suposiciones o presunciones que den cuenta de la existencia o condiciones de la obligación y finalmente, **la exigibilidad** determina que la obligación pueda ser cobrada por cuanto debe incorporar la forma de vencimiento estando ligada íntimamente al plazo y la condición.

En tal sentido, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en el estudio de una acción constitucional, con relación a este tópico precisó:

“La claridad de la obligación, consiste en que el documento que la contenga sea inteligible, inequívoco y sin confusión en el contenido y alcance obligacional de manera que no sea oscuro con relación al crédito a favor del acreedor y la deuda respecto del deudor. Que los elementos de la obligación, sustancialmente se encuentren presentes: Los sujetos, el objeto y el vínculo jurídico. Tanto el préstamo a favor del sujeto activo, así como la acreencia en contra y a cargo del sujeto pasivo.

La expresividad, como característica adicional, significa que la obligación debe ser explícita, no implícita ni presunta, salvo en la confesión presunta de las preguntas asertivas. No se trata de que no haya necesidad de realizar argumentaciones densas o rebuscadas para hallar la obligación, por cuanto lo meramente indicativo o implícito o tácito al repugnar con lo expreso no puede ser exigido ejecutivamente. Tampoco de suposiciones o de formulación de teorías o hipótesis para hallar el título. Y es exigible en cuanto la obligación es pura y simple o de plazo vencido o de condición cumplida.”¹ (énfasis del despacho).

2. En aras de satisfacer tal exigencia, el extremo demandante aportó con el libelo introductor el pagaré número 0001004001810497940881 suscrito por el señor Edilberto Rodríguez Ribero mediante la cual se obligó a cancelar a la orden de BANCO CORBANCA COLOMBIA S.A., la suma de \$33.380.425 m./cte evidenciándose como fecha de vencimiento el día 16 de mayo 2016.

¹ CSJ, Sala de Casación Civil y Agraria STC3298-2019, M.P. Luis Armando Tolosa

Documento, que cumple a cabalidad con las exigencias previstas en el Art. 621 del Código de Comercio para todo título valor y las especiales consagradas en el artículo 709 ibidem, pues contiene la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero, se señala de forma expresa quien es el acreedor, así como, el obligado cambiario y su vencimiento es a una fecha cierta y determinada, amen que acredita la existencia de una obligación clara, expresa y exigible a cargo del extremo demandado y a favor de la ejecutante, es decir, reúnen los requisitos del artículo 422 del C. G. del P. y por tanto presta mérito ejecutivo, ahora, resulta procedente, el análisis de la excepción propuesta por la parte pasiva, denominada “**PRESCRIPCIÓN**”.

3. Frente a tal excepción, es de advertirse que el fenómeno de la prescripción puede acogerse a través de dos conceptos diferentes, de un lado como un modo adquirir el dominio de las cosas pues en virtud de la posesión por un período determinado y con el cumplimiento de los requisitos legales exigidos, se obtiene el derecho real de los bienes ajenos corporales, raíces o muebles que se encuentran en el comercio humano, de otro lado, como una forma de extinguir las acciones y derechos personales, cuando éstos no se han ejercido en un lapso considerable determinado por el legislador, denominándose **prescripción extintiva o liberatoria** sin que ello implique que se encuentre en discusión la titularidad de las cosas. De manera que para que sea aplicable la figura en comento se requiere **i)** El transcurso del tiempo, **ii)** inactividad del acreedor, **iii)** alegarse expresamente, pues no opera de oficio sino a solicitud de parte **iv)** que no se haya renunciado, suspendido o interrumpido el término de prescripción, sobre el particular la Corporación en cita ha señalado que:

“La prescripción liberatoria o extintiva de derechos personales es un modo de extinguir los derechos y las acciones a consecuencia del transcurso de un lapso predeterminado en la ley, sin que el titular de esos derechos y acciones los haya ejercido. Su consolidación se supedita a que la acción sea prescriptible, que es la regla general, a que transcurra el tiempo legalmente establecido teniendo en consideración la interrupción y suspensión de que puede ser objeto; y a que el titular del derecho de acción se abstenga en ese tiempo de ejercer el derecho en la forma legalmente prevenida.

La prescripción extintiva puede ser de largo o corto tiempo, y sobreviene con el cumplimiento de los requisitos mencionados, pero al paso que la primera exige el transcurso de diez años (en el caso de la ordinaria y cinco en la ejecutiva la segunda”²

Bajo esta perspectiva en punto de la materialización de la prescripción es menester que concurren tres sujetos pues se itera no opera de pleno derecho siendo menester alegarla en el transcurso del proceso. Al respecto la Corte Constitucional en Sentencia 091 de 2018 precisó:

² Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil SC6575-2015 M.P. Jesús Vall de Ruten Ruiz.

“La prescripción extintiva ante la Jurisdicción Ordinaria requiere, para su configuración, la participación de tres sujetos: el acreedor o titular del derecho que no exigió su cumplimiento o ejecución a tiempo, el deudor o sujeto pasivo de la relación jurídica que alegó la ocurrencia de la prescripción como excepción y así se opuso a su realización y el juez que la declaró en la sentencia. La falta de la participación de cualquiera de los tres sujetos, impide la configuración de la prescripción.”

Ahora como se expresó en líneas precedentes, el término prescriptivo es susceptible de interrupción o renuncia, eventos en los cuales el lapso que había comenzado a transcurrir se suprime y la misma no puede consumarse debiendo iniciarse un nuevo periodo, es decir se revive nuevamente la acción cambiaria en cabeza del acreedor. Una de las formas de borrar el término prescriptivo que ha corrido y, por consiguiente, revivir el derecho de acción que le asiste al acreedor, es la **interrupción** que puede ser de manera civil o naturalmente al tenor de lo dispuesto en el artículo 2539 del Código Civil acaeciendo lo primero, cuando se presenta la demanda instaurada por el acreedor para exigir el cumplimiento de la obligación, y lo segundo, en el evento en que el deudor reconoce ya sea expresa o tácitamente la obligación a su cargo bien porque la confiesa o hace abonos, paga intereses etc.³

No obstante lo anterior, conforme a lo previsto en el artículo 94 del Código General del Proceso para que la presentación de la demanda posea la virtualidad de interrumpir el término de prescripción, se debe realizar la intimación al demandado dentro del lapso de un (1) año contado a partir del día siguiente a la notificación del auto admisorio al demandante o el mandamiento de pago al ejecutante, siendo así, siendo así, en los términos del artículo 789 del Código de Comercio la acción cambiaria que se deriva del título valor pagaré prescribe en el término de tres (3) años contados a partir del día de vencimiento.

3.1. Sin embargo, la jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia, en reiteradas oportunidades al interpretar las normas que regulan el término extintivo, ha señalado que dicho plazo no opera de manera automática, sino que debe observarse desde una perspectiva subjetivista, cuyo fin es el de evitar las consecuencias nocivas de demandas que se interponen con premeditada tardanza, pero también la extinción de derechos sustanciales, por causas no atribuibles a quien legítimamente los reclama, así:

“... la interrupción civil – tiene dicho la Corte- de la prescripción tanto adquisitiva como extintiva, a consecuencia de la interposición de la demanda no se consuma con la sola presentación de la demanda, sino en el momento en el que se notifica al demandado, salvo que el retardo en notificar a este no se deba a culpa del demandante, por no haber realizado la actividad necesaria para que dicha notificación se efectuara, sino al

³ *Ibidem.*

demandado, por haber eludido esta, o al personal del juzgado encargado de hacerla, casos estos en los cuales la interrupción se entiende consumada con la presentación de la demanda” (subrayas y negrillas fuera de texto) (G.J. números 2032, pág. 634 y 658; 2050 pág. 660; 2154, pág 132; 2318, pág. 120)”

“Es decir, que si a pesar de la diligencia del actor, el auto admisorio de la demanda no logra notificarse en tiempo a los demandados debido a evasivas o entorpecimiento de estos o por demoras de la administración de justicia o de otro tipo, que no sean imputables al reclamante, el ejercicio oportuno de la acción con la presentación de la demanda tiene la virtud de impedir que opere la caducidad. Este criterio conserva plena vigencia, por estar inspirado en los supremos ideales de justicia y equidad, adaptados al derecho objetivo, a tal punto que a pesar de la doctrina antigua consideró que el concepto de caducidad estaba ligado a la idea de plazo extintivo e improrrogable – cuyo vencimiento produce el decaimiento de la acción de manera inevitable y sin tomar en consideración la actividad del juez o de las partes-, ello no fue obstáculo para que esa noción eminentemente teórica o especulativa cediera su rigor ante los supuestos concretos que plantea la realidad que está a la base del derecho actual”¹.

De ahí que la correcta interpretación de la norma que rige el caso impone al juez la obligación de tomar en consideración las referidas circunstancias subjetivas, a fin de no endilgar a la parte demandante unas consecuencias nocivas que no le son en modo alguno atribuibles por no ser producto de su negligencia.

4. Conforme a las anteriores precisiones, debe entrar el Despacho a determinar si en efecto operó el medio exceptivo propuesto, para lo cual, en principio, ha de tenerse en cuenta la fecha de exigibilidad del título aportado como base de recaudo, la data en que se interpuso la demanda y la fecha en que se notificó el mandamiento de pago al extremo ejecutado.

Bajo esta perspectiva, descendiendo al caso objeto de estudio se advierte que el pagare No. 0001004001810497940881 tiene como fecha de exigibilidad el día **17 de mayo de 2016** de donde se colige que el término de prescripción de los 3 años de que trata el artículo 789 en cita, en principio se cumplía el **17 de mayo de 2019**.

De otro lado, se evidencia que la demanda fue presentada a reparto el 22 de septiembre de 2016 (f. 15), es decir, con la presentación del libelo introductor, teóricamente se interrumpió el término de prescripción previsto en el estatuto mercantil siendo menester determinar el momento en que se integró el contradictorio.

Entonces, del expediente se desprende que el mandamiento de pago se notificó por estado a la parte actora el 1º de noviembre de 2016 (fl 19 c.1) lo que implica, que ésta contaba hasta el 1º de noviembre de 2017 para enterar al demandado acerca del contenido de la orden de apremio librada, a fin de lograr la

interrupción de la prescripción con la presentación de la demanda, circunstancia que solo se perfeccionó hasta el 22 de octubre de 2021 a través de curador *ad- litem* (archivo 03 expediente digital), lo que de suyo permite colegir que para la fecha de notificación al ejecutado, las obligaciones derivadas del título báculo de la acción, en principio ya se encontraban afectadas por el fenómeno de la prescripción, de no ser porque existen plazos que deben descontarse del mentado lapso.

En efecto, la tardanza en el enteramiento del ejecutado, observa el Despacho no se debió a la incuria o negligencia de la ejecutante, sino a tardanzas atribuibles a la administración de justicia, pues posteriormente y luego de intentar la notificación personal del demandado con resultados negativos, mediante memorial radicado el 16 de enero de 2017 (fl. 25), solicitó su emplazamiento de conformidad con el artículo 293 del C.G.P., vigente para ese momento, ante lo cual esta sede judicial en proveído del 26 de febrero siguiente (fl. 26), dispuso el emplazamiento de la parte ejecutada, aportándose las publicaciones correspondientes el 15 de diciembre de ese mismo año (fls. 48 y ss.), y finalmente en auto adiado 30 de octubre de 2018 se procedió a designarle Curador Ad Litem para que concurriera a notificarse de la orden de pago y los representara en el proceso. (fl. 56)

Adviértase que desde que se designó Curador *ad-litem* hasta el momento en que se notificó la auxiliar de la justicia Jairo Ríos Mendigaño (22 de octubre de 2021), transcurrió, alrededor de tres (3) años, como quiera que los que eran designados no concurrieron a tomar posesión o se excusaban para no aceptar el mismo, tal como se desprende del plenario.

Por tanto, es posible concluir que efectivamente la parte demandante asumió las cargas procesales que le eran propias, pues antes de que venciera el término consagrado por el legislador para impedir que operara la prescripción (17 de mayo de 2019), procuró no solo la notificación del deudor, sino que ante el resultado negativo de la misma pidió el emplazamiento del ejecutado y la designación de un curador *ad-litem*, razón por la cual y teniendo en cuenta que en el presente caso se dan los presupuestos exigidos del precedente jurisprudencial antes citado, impide que la excepción de prescripción pueda prosperar.

5. En cuanto a la **EXCEPCIÓN GENERICA** solicita la pasiva que se dé aplicación al reconocimiento de la excepción que se encuentre probada en el expediente y que no fue alegada.

Dispone el artículo 282 del Código General del Proceso que: *“En cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción deberá*

reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda”.

Sin embargo, en este caso no encuentra el Despacho hechos que puedan constituir una excepción de las que el juez pueda declarar de oficio, o que en realidad se hayan demostrados hechos que puedan constituir alguna de aquellas.

6. De lo anterior deviene la improsperidad de las excepciones de mérito propuestas por la parte demandada y, en consecuencia, se ha de ordenar seguir adelante con la ejecución, en la forma dispuesta en el mandamiento de pago.

VI. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto el **Juzgado Diecinueve (19) Civil Municipal de Bogotá D.C.**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

VII. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR infundadas las excepciones de mérito planteadas por el extremo demandado, por las razones consignadas en esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR seguir adelante la ejecución conforme el mandamiento de pago librado.

TERCERO: Decretar la venta en pública subasta los bienes embargados al demandado y los que posteriormente se llegaren a embargar.

CUARTO: Practíquese la liquidación del crédito conforme lo normado en el artículo 446 del C. G. del P.

QUINTO: Condenar en costas de esta instancia a la parte demandada y a favor de la parte ejecutante. Para lo cual téngase como agencias en derecho la suma de \$2.336.629.

Liquídense.

Notifíquese y cúmplase,⁴

IRIS MILDRED GUTIÉRREZ
JUEZ

⁴ Este proveído se notificó por estado No. 05 de 21 de enero de 2022.

Firmado Por:

**Iris Mildred Gutierrez
Juez Municipal
Juzgado Municipal
Civil 019
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **292aeaf356d62c7dddc23d334efe2b21780a885dbd503bf560e4a6fd0598ad9**

Documento generado en 20/01/2022 11:02:21 AM

Valide este documento electrónico en la siguiente URL: <https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>